



**JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS**
Edificio Banco de la Republica Oficina 901 Teléfono 2616718
j01cctoestiba@cendoj.ramajudicial.gov.co
Ibagué - Tolima

Ibagué (Tolima) julio once (11) de dos mil trece (2013)

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

Proceso Especial: *Solicitud de Restitución y Formalización de tierras (Baldío)*
No. Radicación: *73001-31-21-001-2013-00021-00*
Solicitante: *Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Dirección Territorial Tolima - en nombre y representación de la ciudadana LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO*

ASUNTO OBJETO DE DECISION

*Por cumplirse a cabalidad los preceptos establecidos en la ley 1448 de 2011, procede el Despacho a proferir la decisión de fondo que en derecho corresponda, respecto de la Solicitud de **RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS** instaurada por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Dirección Territorial Tolima, en nombre y representación de la señora **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO** identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.610.932, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,*

I.- ANTECEDENTES

1.1.- la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Dirección Territorial Tolima, en desarrollo y aplicación del artículo 105 y s.s., de la Ley 1448 de 2011, incluye dentro de sus funciones, entre otras la de diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, de oficio o a solicitud de parte y certificar su inscripción; igualmente, está facultada para acopiar las pruebas de despojos y abandonos forzados para presentarlas en los procesos o solicitudes de restitución y formalización; finalmente, tiene la facultad de tramitar ante las autoridades competentes y a nombre de los titulares de la acción de restitución y formalización de tierras, la solicitud de que trata el artículo 83 de la precitada ley.

1.2.- Bajo este marco normativo, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Dirección Territorial Tolima (U.A.E.G.R.T.D.), expidió la Resolución Administrativa CIR 0011 del quince (15) de febrero de dos mil trece (2013), visible a folio 17, mediante la cual se acreditó el REQUISITO DE

PROCEDIBILIDAD establecido en el inciso 5º del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, es decir que se comprobó que el predio baldío **EL RETIRO**, ubicado en la vereda Santa Rita, municipio de Ataco – Tolima, distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria No. 355-21412, y código catastral N° 00-01-0024-0009-000 se encontraba debidamente inscrito en el Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas.

1.3.- En el mismo sentido, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Dirección Territorial Tolima, expidió la Resolución RID 0011 del quince (15) de febrero de dos mil trece (2013), visible a folio 12, como respuesta a la solicitud de representación judicial consagrada en los artículos 81, 82 y numeral 5º del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, formulada de manera expresa y voluntaria por la señora **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.610.932, en su calidad de **OCUPANTE** y **VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO**, quien acudió a la jurisdicción de tierras, a fin de obtener la restitución, adjudicación y formalización del predio **EL RETIRO**, distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria No. 355-21412 y código catastral N° 00-01-0024-0009-000 ubicado en la vereda Santa Rita, del Municipio de Ataco, Departamento del Tolima. Manifestó a su vez, que a partir del nueve (9) de septiembre de mil novecientos setenta y uno (1971), había adquirido el inmueble en compañía del señor Luis María Perdomo Rivera (Q.E.D.P), quien en vida era su cónyuge y se identificaba con cédula de ciudadanía N° 2.252.266, a través de cesión realizada por el señor VALERIO SÁENZ (FALLECIDO) padre de la solicitante, a favor de su esposo y sobre la cual se protocolizaron unas mejoras mediante Escritura Pública N° 757 del nueve (9) de septiembre de mil novecientos setenta y uno (1.971) y debidamente registrada como falsa tradición en el folio de matrícula inmobiliaria antes mencionada.

1.4.- El veinte (20) de febrero de dos mil dos (2.002) la solicitante señora LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO, identificada como antes se expuso, se desplazó de la zona por los fuertes y continuos enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias - F.R.A.C. -, limitando de esta manera la relación jurídica respecto al predio. Sin embargo, después de realizadas las labores de campo por parte de la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras se logró establecer que en la actualidad el predio se encuentra habitado por el señor FERNANDO PERDOMO SÁENZ quien es hijo de la solicitante y de ésta forma continua con la ocupación del terreno.

1.5.- En la mencionada escritura obran las declaraciones de los señores LUIS EVELIO RENDON, MANUEL NAGLES y TEODORO NAGLES, de las cuales se

logra establecer que la naturaleza del predio es un baldío propiedad de la Nación, tal y como consta a folios 19 a 23 del expediente.

1.6.- Desde el año 1971 se ejerció la ocupación sobre el predio por parte del señor **LUIS MARIA PERDOMO (Q.E.D.P.)**, quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía N° 2.252.266 y luego, por parte de la señora **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO**, identificada con cédula de ciudadanía N° 28.610.932, hasta la fecha de desplazamiento a inicio del año 2.002.

1.7.- La solicitante señora **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO** acudió a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Dirección Territorial Tolima - presentando la solicitud correspondiente, la cual se tramitó en virtud de los preceptos consagrados en el artículo 13 del Decreto 4829 de 2011, que efectuó la comunicación del estudio formal de inscripción en el Registro de Tierras despojadas y Abandonadas, dando así cumplimiento al requisito de procedibilidad citado en el numeral 1.2.- de esta sentencia, advirtiendo además que luego de la visita al fundo, se comprobó que su hijo **FERNANDO PERDOMO SAENZ** se encuentra actualmente en el predio **EL RETIRO** como quedó anteriormente anotado.

1.8.- Conforme a la información suministrada por la UAEGRTD la cual se encuentra apoyada por su grupo catastral y de Análisis Territorial el predio **EL RETIRO**, cuenta con una extensión de **DIECIOCHO HECTAREAS HECTÁREAS MIL OCHO METROS CUADRADOS (18,1008 HAS)** la cual se tiene como extensión real, toda vez que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, **IGAC** y la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral Tolima frente a la información del área de terreno, presentaron una información discrepante.

1.9.- En conclusión, conforme a la información suministrada por la solicitante señora **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO**, se tiene que lo reclamado por los mencionados a través de la Unidad de Restitución der Tierras, es la formalización del derecho que como **OCUPANTE** ha adquirido respecto del predio baldío ya identificado en los numerales precedentes.

II. P E T I C I O N E S:

2.1.- En el libelo con que se dio inicio a la solicitud referenciada, el representante legal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras

Despojadas Dirección Territorial Tolima, en síntesis, actuando en nombre de su representada solicita que se acceda a las siguientes:

“...PRIMERA: Se **PROTEJA** el derecho fundamental a la restitución de Tierras de **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO** identificada (a) con cédula de ciudadanía No. 28.610.932, y demás miembros del núcleo familiar, en los términos establecidos por la Honorable Corte Constitucional, mediante sentencia T- 821 de 2007.

...SEGUNDA: Se **RESTITUYA** y **FORMALICE** a **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO**, identificada (a) con cédula de ciudadanía No. 28.610.932, y demás miembros del núcleo familiar, sus derechos sobre el predio El Retiro de la Vereda Santa Rita del Municipio de Ataco, Tolima, identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 355-21412 y el Código Catastral N° 00-01-0024-0009-000 garantizando la seguridad jurídica y material del inmueble.

...TERCERA: Se **ORDENE** a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Circulo Registral de Chaparral, Tolima.

- i) *Inscribir la sentencia en los términos señalados en el literal c del Artículo 91 de la Ley 1448 de 2.011.*
- ii) *Cancelar todo antecedente registral, gravamen y limitaciones de dominio, título de tenencia, arrendamiento, falsas tradiciones y medidas cautelares registradas con posterioridad al abandono, así como la cancelación de los correspondientes asientos e inscripciones registrales.*

...CUARTA: Se **RECONOZCA** a los acreedores asociados al (os) predio (s) objeto de restitución.

...QUINTA: Se **ORDENE** a los entes territoriales, la aplicación de los sistemas de alivios por concepto de impuesto predial, tasas y otras contribuciones asociadas al (os) predios (s) objeto de restitución, causados desde su desplazamiento y/o despojo hasta la materialización del fallo de restitución, conforme a lo dispuesto en el Artículo 121 de la Ley 1448 de 2.011 y el Artículo 139 del Decreto 4800 de 2.011.

...SEXTA: Se **ORDENE** a los entes territoriales, la aplicación de la exoneración de pago del impuesto predial, tasas y otras contribuciones asociadas al(os) predios objeto de restitución, por un periodo temporal de dos (2) años contados a partir de la

materialización del fallo de restitución, fundamento en el Programa de Alivio de Pasivos en el que deben contar con las entidades territoriales, de tal forma que una vez culminada la exoneración, su predio ingrese nuevamente a la base gravable del Municipio y por consiguiente debe pagar el impuesto predial, tasas u otras contribuciones asociadas al(os) predio(s) objeto de restitución, en el caso que existiesen.

...SEPTIMA: Se **ORDENE** al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, aliviar la cartera asociada al(os) predio(s) objeto de restitución y contraída por el beneficiario de la restitución con empresas de servicios públicos y con entidades del sector financiero.

...OCTAVA: Se **OTORGUE** subsidio de vivienda de interés social rural, condicionado a la aplicación única y exclusiva sobre el predio EL RETIRO de la Vereda Santa Rita del municipio de Ataco, Tolima, identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 355-21412 y el código catastral N° 00-01-0024-0009-000.

...NOVENA: Se **ORDENE** la implementación de proyecto productivo que se adecue de la mejor forma a las características del inmueble, condicionado a la aplicación única y exclusiva sobre el predio el Retiro de la Vereda Santa Rita del Municipio de Ataco, Tolima, identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 355-21412 y el código catastral N° 00-01-0024-0009-000.

...DECIMA: Si existiere mérito para ello, solicito a su Despacho se **DECLARE** la nulidad de los actos administrativos que extingan o reconozcan derechos individuales o colectivos, o modifiquen situaciones jurídicas particulares y correctas, incluyendo los permisos, concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales que hubieren otorgado sobre los predios solicitados en restitución y formalización en esta solicitud.

...DECIMA PRIMERA: Se **DICTEN** las demás órdenes que se consideren pertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

Subsidiariamente y al ser imposible la restitución del(os) predio(s) objeto del presente proceso, comedidamente solicito:

...PRIMERA: Se ORDENE a la – UAEGRTD – hacer efectivas en favor del(os) solicitante(s), la compensación de que trata el Artículo 72 de la Ley 1448 de 2.011, siguiendo el orden respectivo frente a sus modalidades.

...SEGUNDA: Se ORDENE al(os) solicitante(s) cuyos(s) bien(es) sea(n) imposible(s) de restituir de conformidad con las causales legalmente establecidas, la transferencia y entrega material de dicho(s) bien(es) al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, una vez haya recibido la compensación de que trata la pretensión anterior, de acuerdo con lo dispuesto por el literal K del Artículo 91 de Ley de 1448 de 2.011.

PETICIONES ESPECIALES

...PRIMERA: Se CONCENTREN en este trámite especial todos los procesos o actuaciones judiciales, administrativas o de cualquier otra naturaleza que adelanten otras autoridades públicas o notariales, en los cuales se hallen comprometidos derechos sobre el predio objeto de esta acción.

...SEGUNDA: Se REQUIERA al Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces, a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC -, al instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER -, para que pongan al tanto a los jueces a los Magistrados, a las Oficinas de Registro de Instrumentos a Públicos, a las Notarías y a sus dependencias u oficinas territoriales, sobre las actuaciones o requerimientos del proceso de restitución, lo anterior en los términos del Artículo 96 de la Ley 1448 de 2.011.

...TERCERA: Se OREDENE a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Circulo Registral de Chaparral, Tolima, la inscripción en el folio de matrícula inmobiliario de la medida de protección jurídica prevista en el Artículo 19 de la Ley 387 de 1.997.

III.- ACTUACIÓN PROCESAL

3.1.- FASE ADMINISTRATIVA. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, atendió la solicitud presentada por la señora **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO** (Fl. 11) el primero (01) de febrero de dos mil trece (2013), mediante la cual manifestaba que por estar inscrita en el registro de Tierras

Despojadas y Abandonadas Forzosamente, requería la designación de un representante judicial que adelantara las gestiones que fueren pertinentes en defensa de sus intereses, conforme a las preceptivas consagradas en la ley 1448 de 2011.

3.1.1.- Consecuentemente con la petición antes mencionada, una vez se consultó el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, la citada Unidad emitió la **Resolución No. CIR 0011 del 15 de febrero de 2013**, mediante la cual se acreditó el cumplimiento del requisito de procedibilidad establecido en el inciso quinto del art. 76 de la Ley 1448 de 2011, en concordancia con el artículo 13 Numeral 2º del Decreto 4829 de 2011, tal y como consta en copia de la misma (fl.17), dando así inicio formal a la etapa administrativa de la presente solicitud.

3.1.2.- Igualmente, y como parte inicial de la acción de formalización, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, expidió la **RESOLUCION No. RID 0011 del 15 de febrero de 2013**, la cual obra a folio 12 frente y vuelto, mediante la cual se designó como representante judicial de la solicitante señora **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO**, al Doctor **EDGARDO AUGUSTO SANCHEZ LEAL**, quien en ejercicio de dicho mandato radicó la solicitud en la oficina judicial el día 27 de febrero de 2013, anexando entre otros los siguientes documentos:

3.1.2.1.) Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, Constancia CIR 0011 del 15 de febrero de 2013, emanada de la Dirección Territorial Tolima de la Unidad Administrativa Especial de la Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. (Folio 17).

3.1.2.2.) Copia simple de la constancia de la Unidad para la Atención y Reparación a las víctimas donde se informa que verificado el Registro Único de Víctimas (RUV) la solicitante **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO** se encuentra incluida (Folio 43).

3.1.2.3.) Copia simple del Informe Técnico de Área Micro - Focalizada Vereda Santa Rita, correspondiente al predio objeto de restitución emanado de la Dirección Territorial Tolima de la Unidad Administrativa Especial de la Gestión de Restitución de Tierras. (Folios 28 a 40).

3.1.2.4.) Copia simple del Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 355-21412 expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral (Tol) correspondiente al bien baldío objeto de restitución. (Folio 60).

3.1.2.5.) Copia simple de la Certificación catastral expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que identifica y ubica el inmueble objeto de restitución, denominado **EL RETIRO** en el municipio de Ataco (Tol). (Fl. 61)

3.1.2.6.) Copia simple del Documento de Análisis de Contexto que discrimina la dinámica del conflicto, los actores armados de la zona, la violencia generalizada, el

desplazamiento forzado y el abandono de tierra y la cronología de los hechos causantes del despojo. (Fls. 53 a 58)

3.1.2.7.) Copia simple de las declaraciones rendidas por los señores JESUS MARIA LASSO TIQUE y ABRAHAM ALDANA GUARNIZO ante la Unidad Administrativa de Gestión y Restitución de Tierras (Fls.41 a 42 fte y vto)

3.2.- FASE JUDICIAL. *Mediante auto calendado marzo cuatro (4) de 2013, el cual obra a folios 64 y 65 del expediente, éste estrado judicial admitió la solicitud por estar cumplidos a cabalidad los requisitos exigidos en los artículos 81, 82 y s.s., de la Ley 1448 de 2011, ordenándose simultáneamente, entre otras cosas las siguientes:*

- Inscripción de la solicitud en el folio de matrícula inmobiliaria N° 355-21412.*
- Suspensión de los procesos iniciados ante la jurisdicción ordinaria que tuvieran relación con el inmueble cuya restitución se solicita, excepto los procesos de expropiación.*
- Publicación del auto admisorio, para que las personas que se sientan afectadas con la suspensión de procesos y restitución misma, comparezcan y hagan valer sus derechos.*

3.2.1.- *Tal y como se dispusiera en el auto admisorio de la solicitud, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral (Tol), acreditó el cumplimiento a cabalidad lo allí dispuesto, plasmando en las Anotaciones No. 9 y 10 del folio de matrícula inmobiliaria No. 355-21412, el registro de la misma, así como la prohibición judicial que dejó fuera del comercio el inmueble. (Fl. 105).*

3.2.2.- *Concordantemente con lo expuesto, se dio cumplimiento al principio de publicidad, por prensa escrita, tal y como consta en la publicación correspondiente del auto admisorio de la solicitud, respecto del predio EL RETIRO en la edición del periódico El Espectador, realizada el domingo cuatro (4) de marzo del año dos mil trece, como se observa a folios 121 del expediente.*

3.3.- INTERVENCION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO. *La Procuradora 27 Judicial I Delegada para Restitución de Tierras, estando debidamente notificada del auto admisorio (fl.72) de la solicitud impetrada a favor de la señora LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO, rindió concepto favorable a la solicitud de restitución y formalización impetrada por la víctima solicitante, el cual es visible a folios 147 a 154 del expediente.*

IV. CONSIDERACIONES

IV.1.- JUSTICIA TRANSICIONAL.

IV.1.1.- Tal y como se dijera en el auto admisorio de la presente solicitud, respecto de esta figura jurídica el legislador colombiano plasmó en el artículo 8° de la Ley 1448 de 2011, la siguiente definición: “ARTICULO 8° JUSTICIA TRANSICIONAL. Entiéndase por justicia transicional los diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad para garantizar que los responsables de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible”.

IV.1.2.- Para arribar al anterior precepto legal, se tuvieron en cuenta experiencias internacionales, que concibieron la JUSTICIA TRANSICIONAL como el conjunto de mecanismos implementados por algunas sociedades que han enfrentado los legados de violaciones masivas a derechos humanos ocurridas con ocasión de conflictos armados o regímenes dictatoriales. Es así, como el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas “ONU” hizo a través de su Secretario General, un pronunciamiento en el año 2004, sobre el Estado de Derecho y Justicia Transicional en sociedades en conflicto y posconflicto, que la define de la siguiente forma:

“[...] abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados y con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por completo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos”.

IV.1.3.- Armónicamente con lo ya discurrido, la suscrita juez considera que la justicia transicional, es el instrumento jurídico creado por el legislativo, como parte del andamiaje que desde un punto de vista macro, conforma el marco legal para ir estructurando la columna vertebral para la paz, y que es consecuencia directa de una serie

ininterrumpida de actos de violencia, barbarie y terrorismo generalizado, realizados en forma indiscriminada por grupos armados ilegales que desde hace más de cinco décadas han venido desangrando nuestro país.

IV.2.- PROBLEMA JURIDICO.

*IV.2.1.- La inquietud por resolver, se ha de analizar desde un punto de vista bifronte, a saber: PRIMERO: establecer si en aplicación de la justicia transicional emanada de la Ley 1448 de 2011, en concordancia con otras normatividades reguladoras de la materia, como son el Bloque de Constitucionalidad, y en lo pertinente la Ley 160 de 1994, es posible acceder a la solicitud de formalización, restitución y adjudicación instaurada a través de abogada adscrita a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Dirección Territorial Tolima, quien actúa en nombre y representación de la víctima solicitante y ocupante señora **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO**, respecto del inmueble BALDIO RURAL denominado **EL RETIRO**, identificado con el folio de matrícula Inmobiliaria No. 355-21412 y código catastral 00-01-0024-0009-000 del cual fue despojada en forma violenta y SEGUNDO: analizar la posibilidad de acceder a la concesión de las COMPENSACIONES solicitadas por el apoderado de la víctima, en calidad de PRETENSIONES SUBSIDIARIAS, siempre y cuando se torne imposible acceder a la solicitud de restitución material. Finalmente, se advierte que ni en la etapa administrativa ni en la fase judicial, se presentó oposición.*

IV.2.2.- Para resolver el cuestionamiento, especialmente lo que se refiere a la formalización y restitución, el Despacho se valdrá de las leyes sustantivas ya mencionadas y pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, que abordó el estudio de uno de los flagelos más grandes que agobia nuestro país, como es el desplazamiento forzado, el cual se convirtió en el principal drama humanitario de Colombia en los últimos años. Por tratarse de OCUPANTES y en especial de un PREDIO BALDIO, se abordará el tema de LA ADJUDICACIÓN, aplicando para el efecto la normatividad vigente establecida por la Ley 160 de 1994 y en lo pertinente la Ley 1448 de 2011, que contempla unas especiales características, que son sui generis, respecto de otras legislaciones.

IV.3.- MARCO NORMATIVO.

IV.3.1.- Desde el mismo diseño constitucional, Colombia buscó proteger amplia y suficientemente los derechos de las víctimas, siendo así que dentro del segmento de los derechos fundamentales que consagra la Carta, artículos 11 y subsiguientes, se

encuentran subsumidos los de la primacía de los derechos de la persona y protección de la familia, en los que obviamente se incluyen todos aquellos que estén en situación de desplazamiento forzado. En el mismo sentido, el artículo 2º de la Carta, estatuye como fines esenciales del Estado, entre otros, el de garantizar la efectividad de los derechos, atendiendo que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todos los residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades. Es así, que armónicamente desde el punto de vista constitucional, los diversos órganos y entidades del Estado, se han repartido multiplicidad de funciones, con finalidades específicas, como las de satisfacer y contribuir efectivamente con el derecho a la reparación de las víctimas despojadas, por lo que procedió a construir la plataforma administrativa y jurídica suficiente para ello, expidiendo los procedimientos y herramientas necesarias, para así permitir que todos aquellos que se vieron forzados a desarraigarse como consecuencia de hechos de violencia, tuvieran la oportunidad de retornar, previa devolución del terruño que se vieron obligados a abandonar.

IV.3.2.- Dado el desbordamiento de la crisis humanitaria generada por el desplazamiento forzado, la Corte Constitucional asumió con toda entereza dicha problemática, profiriendo en consecuencia diversos pronunciamientos entre ellos las sentencias T-025 de 2004, T-585 de 2006, T-821 de 2007, T-297 de 2008, T-068 de 2010 y T-159 de 2011, en las que se resaltan como principales razones para declarar el estado de cosas inconstitucional, entre otras las siguientes:

T-025 de 2004. “. (i) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas; (ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos; (iii) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; (iv) la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos; (v) la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; (vi) si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derecho, se produciría una mayor congestión judicial. Desde el punto de vista constitucional, es imperioso destinar el presupuesto necesario para que los derechos fundamentales de los desplazados tengan plena realización. La obligación constitucional del Estado de garantizar una protección adecuada a quienes por del desplazamiento forzado interno se encuentran en condiciones indignas de vida no puede ser aplazada indefinidamente.”

T-585 de 2006. “...en suma, el derecho a un vivienda digna – como derecho económico, social y cultural – será fundamental cuando (i) por vía normativa se defina su contenido, de modo que pueda traducirse en un derecho subjetivo; (ii) cuando su no satisfacción ponga en riesgo otros derechos de naturaleza fundamental, como el derecho a la vida, al mínimo vital, a la integridad física, etc., y (iii) cuando se reclame la protección del derecho en cuestión frente a injerencias arbitrarias de las autoridades estatales y de los particulares”.

T-754 de 2006. “...La Corte protegió a un grupo de jefes de hogar desplazados por la violencia, quienes habían realizado durante varios años gestiones para adquirir un inmueble rural ante el INCODER, sin que hasta la fecha de presentación de la tutela se hubieran beneficiado por alguno de los programas públicos. La Corte rechazó la inoperancia estatal ante los reclamos presentados por las familias desplazadas, reitero que los defectos institucionales identificados en la T-025 de 2004 continuaban presentándose y resalto que las instituciones estatales encargadas de la atención a la población desplazada existían “para brindar soluciones a las necesidades sociales y ellas en este caso no han sido el mejor ejemplo de eficacia y celeridad, como principios que gobiernan la función administrativa (Art. 209 C.P.)”. En consecuencia ordenó a las autoridades adoptar “medidas efectivas para proveer a los accionantes con soluciones en materia de vivienda y una asignación de tierra que (...) les permita reorientar y desarrollar en ese nuevo lugar su proyecto de vida, advirtiéndose que si bien, como ya se ha dicho, los desplazados tienen el derecho a la asignación de predios, ello no significa que necesariamente se les asignarán los escogidos por ellos, pues dicha determinación debe ser realizada por el INCODER como autoridad competente, de conformidad con las normas pertinentes.”

T-159 de 2011. “...De igual manera en la declaración de San José sobre refugiados y personas desplazadas en la sección II de dicho documento se consagraron los derechos a la reubicación de viviendas y el patrimonio para la población desplazada: “Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a que se les restituyan las viviendas, las tierras y el patrimonio de que hayan sido privados arbitraria o ilegalmente”.

IV.3.3.- El marco legal de la política de atención, asistencia y reparación a las víctimas está definido por la Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, que se ha reglamentado a través de los siguientes decretos:

Decreto 4633 de 2011: a través del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Decreto 4634 de 2011, a través del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos Rom o Gitano.

Decreto 4635 de 2011, a través del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Decreto 4800 de 2011, por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones.

Decreto 4829 de 2011, por el cual se reglamenta el capítulo III del Título IV la Ley 1448 de 2011 en relación con la restitución de tierras.

IV.3.4.- Así, la Ley y sus decretos reglamentarios consagran el marco institucional, procedimental y sustancial para que el Estado provea las diferentes medidas a las que tienen derecho las personas víctimas del conflicto armado que se aglutinan básicamente en ese amplio segmento que conforma la población desarraigada, desplazada y despojada de sus bienes, y que por ende se les pueda brindar efectivamente los servicios de salud, educación, atención básica, auxilios y ayudas económicas, incluyendo medidas de reparación como restitución de tierras y vivienda, flexibilización de pasivos y acceso a créditos, y las demás establecidas en la misma ley. Adicionalmente, es necesario precisar que en relación con las víctimas del desplazamiento forzado por la violencia, las disposiciones contenidas en la Ley 1448 de 2011 se complementan con la política pública de prevención y estabilización socioeconómica para la población víctima del desplazamiento forzado establecidas en la Ley 387 de 1997 y demás normas que la reglamentan; igualmente, con lo determinado en materia de goce efectivo de derechos de esta población, que no le sea contrario a la Ley de víctimas. Esta particular disposición se ve reflejada a su vez en el capítulo IV del Plan Nacional de Desarrollo, en donde se establecen lineamientos de política pública dirigidos a la población víctima del desplazamiento forzado, los cuales hacen referencia al goce efectivo de derechos de la población víctima de este flagelo haciendo especial énfasis en aquellos que contribuyen al restablecimiento social y económico.

IV.3.5.- BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD:

Conforme los postulados consagrados en el artículo 27 de la Ley 1448 de 2011, “En lo dispuesto en la presente ley, prevalecerá lo establecido en los tratados y

convenios internacionales ratificados por Colombia sobre Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos que prohíban su limitación durante los estados de excepción, por formar parte del bloque de constitucionalidad. En los casos de reparación administrativa, el intérprete de las normas consagradas en la presente ley se encuentra en el deber de escoger y aplicar la regulación o la interpretación que más favorezca a la dignidad y libertad de la persona humana, así como a la vigencia de los Derechos Humanos de las víctimas.”

*IV.3.5.1.- A manera de complemento del anterior precepto legal, el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia prevé el llamado **BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD**, como la normatividad con base en la cual la Corte Constitucional ha emitido diversos pronunciamientos jurisprudenciales, de los cuales entre otros se destaca el siguiente: “...Los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia, así como la Interpretación que de ellos hagan los órganos competentes para tal fin, forman parte del bloque de constitucionalidad, y, en ese sentido, se convierten en parámetros de Interpretación y determinación del alcance de los derechos reconocidos en la Constitución y de la aplicación que de los mismos realicen los operadores judiciales”. En ese sentido hacen parte del llamado Bloque de Constitucionalidad de Colombia “los Convenios de Ginebra, que regulan el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en los casos de conflictos armados Internacionales y conflictos armados no internacionales (o internos), pues han sido incorporados a nuestra normatividad por medio de leyes. Igual sucede con el Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional.*

IV.3.5.2.- La Jurisprudencia constitucional, ha establecido en virtud de los artículos 94 y 214 de la Constitución Nacional que existen Normas Internacionales que constituyen el marco mediante el cual se puede direccionar la ejecución de la política pública de Restitución de tierras en Colombia, resaltando los que a continuación se enuncian: 1) Principios sobre reparaciones de las Naciones Unidas; 2) Principios Internacionales relativos a la restitución de Viviendas y Patrimonio de los refugiados y la población desplazada (PRINCIPIOS PINHEIRO) y 3) Principios Rectores de los desplazamientos conocidos como PRINCIPIOS DENG.

Así ha dicho la Corte: “Las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado y que han sido despojadas violentamente de su tierra (de la tierra de la cual son propietarias o poseedoras), tienen derecho fundamental a que el Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, goce y libre disposición de la misma en las condiciones establecidas por el derecho internacional en la materia. En efecto, en estos casos el derecho a la propiedad o a la posesión adquiere un

carácter particularmente, reforzado, que merece atención especial por parte del Estado. Ciertamente, si el derecho a la reparación Integral del daño causado a víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, es un derecho fundamental, no puede menos que afirmarse que el derecho a la restitución de los bienes de los cuales las personas en situación de desplazamiento han sido despojadas, es también un derecho fundamental. Como bien se sabe, el derecho a la restitución es uno de los derechos que surgen del derecho a la reparación integral. En este sentido es necesario recordar que el artículo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949 y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, consagrados en el Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos Internos de Personas (los llamados principios Deng), y entre ellos, los Principios 21, 28 y 29 y los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las Personas desplazadas, hacen parte del Bloque de Constitucionalidad en sentido lato, en tanto son desarrollos adoptados por la doctrina internacional, del derecho fundamental a la reparación integral por el daño causado (Constitución Política Art 93.2)."

IV.3.5.3.- *Respecto de lo que también se puede entender como BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, es sabido y últimamente aceptado por algunos doctrinantes que la normatividad constitucional no es privilegio exclusivo de los artículos que formalmente integran el texto de la Carta Política. El Estatuto Superior está compuesto por un grupo más amplio de principios, reglas y normas de derecho positivo que lo conforman y que comparten con los artículos de texto de la carta la mayor jerarquía normativa en el orden interno. En este sentido, la noción "bloque de constitucionalidad" pretende transmitir la idea de que la Constitución de un Estado es mucho más amplia que su texto constitucional dado que existen otras disposiciones, contenidas en otros instrumentos o recopilaciones, que también son normas constitucionales.*

IV.3.5.4.- *Acoplamiento a la normatividad nacional del BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, a partir de la promulgación de la Constitución de 1991. Bajo la égida de la nueva Constitución, se marcó una nueva pauta para aplicación de las disposiciones internacionales al orden constitucional interno. Aunque no fue sino a partir del año 1995 que la Corte Constitucional adoptó el concepto de bloque de constitucionalidad - tal como se utiliza hoy en día - muchos de los fallos producidos antes de ese año reconocieron ya la jerarquía constitucional a ciertos instrumentos internacionales. El primer elemento en contribuir a este cambio fue la introducción en el texto constitucional de seis importantes artículos que redefinirían los parámetros de adopción de las normas internacionales en el orden interno. Estos fueron:*

- a) El artículo 9º, el cual reconoció que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto por la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia;
- b) El artículo 93, según el cual "Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia."
- c) El artículo 94, que establece que "la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos."
- d) El artículo 214 que al regular los estados de excepción dice en su numeral 2º: "No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetaran las reglas del derecho internacional humanitario".
- e) El penúltimo inciso del artículo 53 que preceptúa: "Los convenios internacionales del tratado debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna", y
- f) El artículo 101 inciso 2º que dice: "Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República".

IV.3.5.5.- En conclusión, todo el ordenamiento, en su contenido positivo y en su aplicación práctica, debe adecuarse a las normas de jerarquía constitucional. Dando por sentado que las normas que integran el bloque de constitucionalidad son verdaderas normas constitucionales, bien vale entonces acoger las siguientes consideraciones de la Corte que obran como síntesis de la subordinación jurídica a que se ha hecho referencia.

En cuanto a la protección de derechos de los desplazados respecto de sus bienes, éstos se encuentran debidamente consagrados dentro del rubro de las obligaciones que tiene el Estado, diseñando para ello pautas de comportamiento que al ser observadas por las autoridades, se evitarán abusos y además, se garantizarán el uso y goce efectivo de sus posesiones o propiedades.

IV.3.5.6.- Estos son los denominados *Principios Rectores de los Desplazamientos Internos*, que se sintetizan así:

PRINCIPIO 21:

1.- *Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad o sus posesiones.*

2.- *La propiedad y las posesiones de los desplazados Internos disfrutarán de protección en toda circunstancia, en particular, contra los siguientes actos:*

- a) *expolio;*
- b) *ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia;*
- c) *utilización como escudos de operaciones u objetos militares;*
- d) *actos de represalia; y*
- e) *destrucciones o expropiaciones como forma de castigo colectivo.*

3.- *La propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados internos serán objeto de protección contra la destrucción y la apropiación, ocupación o usos arbitrarios e ilegales.*

PRINCIPIO 28

1.- *Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que han regresado o se han reasentado en otra parte.*

2. *Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de los desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso o de su reasentamiento y reintegración.*

PRINCIPIO 29

1.- *Los desplazados Internos que regresen a su hogar o a su lugar de residencia habitual o que se hayan reasentado en otra parte del país no serán objeto de discriminación alguna basada en su desplazamiento. Tendrán derecho a participar de manera plena e igualitaria en los asuntos públicos a todos los niveles y a disponer de acceso en condiciones de Igualdad a los servicios públicos."*

*IV.3.5.7.- De conformidad con los **PRINCIPIOS PINHEIRO**, sobre la **RESTITUCIÓN DE LAS VIVIENDAS Y EL PATRIMONIO DE LOS REFUGIADOS Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS**, tales elementos resultan fundamentales en la justicia restitutiva, pues su esencia radica en impedir efectivamente que se vuelvan a producir situaciones de desplazamiento, para así ayudar a consolidar el logro de la paz. Es así, que todos los refugiados y desplazados tienen derecho a que se les restituyan las viviendas, las tierras y el patrimonio de que hayan sido privados arbitraria o ilegalmente o a que se les indemnice por cualquier vivienda, tierra o bien cuya restitución sea considerada de hecho imposible por un tribunal Independiente e imparcial, para lo cual los Estados darán prioridad de forma manifiesta al derecho de restitución como medio preferente de reparación en esta especial clase de justicia, sin olvidar que éste es un derecho en sí mismo y por lo tanto es independiente de que se haga o no efectivo el regreso de los refugiados y desplazados a quienes les asista razón en su reclamación.*

IV.3.5.8.- Que conforme a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, específicamente el 9, el cual establece que “Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que tienen una dependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma” y por tal razón, la comunidad en bloque solicita a instituciones del Estado que les amparen sus derechos.

V. CASO CONCRETO:

V.1.- EL INMUEBLE. Sobre el bien objeto de restitución, lo que primero se concluye es que se una protocolización de mejoras y una cesión, mediante Escritura Pública N° 757 del nueve (9) de septiembre de 1.971 de la Notaría Única de Chaparral, la cual dio lugar al registro de una falsa tradición y a la apertura del folio de matrícula inmobiliaria N° 355-21412. Dentro de la mencionada escritura obran las declaraciones de los señores LUIS EVELIO RENDON GALLO, MANUEL NAGLES y TEODORO NAGLES de las cuales se logra establecer que se trata de un BALDIO de naturaleza rural.

V.1.1.- Con base en las coordenadas planas y geográficas, del sistema MAGNA – COLOMBIA – BOGOTA, el cual se basó en las tomadas del plano topográfico, transformadas en el Magna Sirgas, y el levantamiento topográfico (actualizado) realizado al inmueble por personal técnico científico adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, se determinaron plenamente los siguientes aspectos:

a) TAMAÑO: DIECIOCHO HECTAREAS HECTÁREAS MIL OCHO METROS CUADRADOS (18,1008 HAS) .

b) CORDENADAS PLANAS Y GEOGRÁFICAS: con base en el levantamiento topográfico - sistema MAGNA – COLOMBIA – BOGOTA, se obtuvieron los siguientes resultados:

ID	NORTE	ESTE	LATITUD			LONGITUD		
			G	M	S	G	M	S
1	886429,9551	863739,0724	3	34	6,021	75	18	13,785
2	886467,1212	863775,5599	3	34	7,233	75	18	12,605
3	886209,5913	864181,2041	3	33	58,868	75	18	59,433
4	886133,2401	864084,0512	3	33	56,379	75	18	2,597
5	886029,5931	864158,2035	3	33	53,008	75	18	0,191
6	885913,2787	864124,1353	3	33	49,221	75	18	1,289
7	885864,5754	864013,8007	3	33	47,631	75	18	4,861
8	886114,1593	863557,8601	3	33	55,735	75	18	19,642

9	886240,0511	863680,0720	3	33	59,839	75	18	15,688
10	886252,4333	863923,9801	3	34	0,251	75	18	7,789
11	886358,0649	863916,8985	3	34	3,689	75	18	8,029

c) LINDEROS:

DESCRIPCION DE LINDEROS – LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	
NORTE	Se toma como punto de partida detallado con el N° 2, se avanza en sentido general sureste en línea quebrada por el margen de la vía hasta ubicar en punto N° 3, colindando con el predio de SUCESIÓN GABRIEL ORTIZ DIAZ en una distancia de 497, 466 metros.
SUR	Desde el punto N° 6, en línea quebrada y en dirección suroeste hasta ubicar el punto N° 7, colindando en una distancia de 129,613 metros con el predio de MISAEL PERALTA ORTIZ; de allí se continúa en línea quebrada por el margen de la quebrada El Chuquio, en dirección noroeste hasta el punto N° 8 colindando en una distancia de 550.616 metros con el predio del mismo propietario.
ORIENTE	Desde el punto N° 3 se sigue en sentido general sureste y luego suroeste, en línea quebrada y en colindancia continua por el margen vial en una distancia 178,007 metros con el predio de Bernardo Aldana hasta ubicar el punto número 4; del punto número 4 se sigue en sentido general sureste en línea quebrada por la vía y en colindancia continua en una distancia de 138,782 metros con el predio del mismo propietario, hasta ubicar el punto número 5; del punto número 5 se sigue en sentido general suroeste en línea quebrada, y en colindancia continua en una distancia de 123,074 metros con el predio de Abraham Aldana Guarnizo, hasta ubicar el punto número 6.
OCCIDENTE	Desde el punto número 8, en dirección noreste en línea quebrada según la corriente de la quebrada Los Guamitos y en colindancia continua con el predio de Misael peralta Ortiz, en una distancia de 187,050 metros hasta ubicar el punto 9; del punto número 9 se sigue en sentido general noreste en línea quebrada y en colindancia continua, en una distancia de 198,850 metros con el predio de Aracelly Cutiva Serrano, hasta ubicar el punto número 1; de allí se continúa en línea recta, en dirección sureste hasta el punto número 10, colindando en distancia de 257,008 metros con el predio de Fernando Perdomo Sáenz; del punto número 10 se sigue en sentido general noroeste en línea quebrada, y en colindancia continua en una distancia de 109,712 metros con el predio del mismo propietario, hasta ubicar el punto número 11, y de éste punto se sigue en sentido general noroeste en línea quebrada y en colindancia continua en una distancia de 202,299 metros con el predio de Fernando Perdomo Sáenz, hasta ubicar el punto N° 2; éste último como punto de partida y encierra.

V.1.2.- La información geodésica, geográfica y catastral correspondiente al predio objeto de formalización y restitución, relacionada en los cuadros que anteceden, a pesar de no encontrarse en armonía con la información primigenia obtenida del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, considera fidedignas las cifras contenidas en el estudio reciente realizado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, donde establece un área definitiva de DIECIOCHO HECTAREAS HECTÁREAS MIL OCHO METROS CUADRADOS (18,1008 HAS) , como se puede observar en la constancia CIR 0011 del 15 de febrero de 2013, visible a folio 17, garantizando así el propósito encomendado, como es la ubicación, reconocimiento, tamaño e individualización del multicitado inmueble, así como su actual condición de seguridad relativa en la región, es decir que no hay presencia de agentes subversivos o factores generadores de violencia, que eventualmente impidieran garantizar el control pre y pos fallo contemplado en la ley antes mencionada.

V.2.- En el caso presente, dada la naturaleza del predio, la calidad de OCUPANTE del mismo que ostenta la peticionaria y los hechos objeto de violencia previamente analizados, se tomará como referente principal la LEY 160 DE 1994 por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA –hoy INCODER-, y se dictan otras disposiciones, en armonía con los preceptos de justicia transicional consagrados en la Ley 1448 de 2011, normatividad que permitirá abordar el estudio del proceso, teniendo en cuenta la finalidad u objeto de la acción incoada e igualmente los ordenamientos citados, necesarios para sanear el derecho de dominio en pequeñas propiedades con vocación eminentemente agrícola.

V.3.- En el presente caso, podemos conceptuar que el predio objeto de la acción es de carácter rural, pues así consta en el complemento del Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 355-21412, visible a folio 60, expedido por el Registrador de Instrumentos Públicos de Chaparral y el certificado emanado del IGAC, que milita a folio 61. Sobre su vocación para realizar explotación agrícola, ello se corrobora a través de lo informado por CORTOLIMA en el concepto de fecha 02 de abril de 2013, en el que se da cuenta de que su uso principal en relación con el uso en áreas de producción económica agropecuaria media, es el agropecuario tradicional (Fl. 111 a 113). Así mismo en la diligencia de inspección judicial realizada al mismo, se da cuenta de su actual explotación económica con cultivos de plátano, yuca, maíz, caña y café (fl.100).

V.4.- VINCULACION JURIDICA. *Respecto del nexó legal de los solicitantes con el predio, además de lo explicado en el numeral V.1.- de esta sentencia, se resalta lo manifestado por los señores TEODORO NAGLES, MANUEL ANTONIO NAGLES LASSO y LUIS EVELIO RENDON GALLO donde en declaraciones de fecha 9 de septiembre 1971 ante el señor Juez Promiscuo de Ataco – Tolima manifestaron conocer el predio el Retiro, como también que dicho terreno se reputaba de la Nación, compuesto de una casa de habitación y plantaciones de café, plátano y rastrojo y que las mentadas mejoras fueron realizadas por el señor LUIS MARIA PERDOMO RIVERA, esposo de la solicitante LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO el cual venía ejerciendo actos de señor y dueño durante veinte (20) años atrás (Fls. 19 a 23). Dichas declaraciones se realizaron con ocasión de la cesión realizada por el padre de la solicitante VALERIO SÁENZ (Q.E.D.P.) al extinto señor PERDOMO RIVERA, así como por la protocolización de mejoras mediante Escritura Pública N° 757 del nueve (9) de septiembre de 1.971 la cual fue registrada como una falsa tradición y dio lugar a la apertura del folio de matrícula*

V.5.- *EL bien inmueble ha sido objeto de explotación de forma directa y sin reconocer derecho superior desde el año 1.971 fecha de la precitada protocolización, en forma quieta, pacífica y tranquila hasta la fecha del desplazamiento en el año 2.002, aciaga data en la que ocurrieron los nefastos hechos que dieron lugar al desplazamiento forzado, los cuales son atribuidos a grupos armados organizados al margen de la ley, como las autodenominadas FARC y PARAMILITARES, que en muchas regiones del país, sembraron el terror y el miedo, como en la vereda Santa Rita, localidad donde está ubicado el predio que se pretende adjudicar.*

V.6.- *Teniendo en cuenta entonces la naturaleza de bien baldío, tenemos que éste puede ser definido como aquél, que nunca ha salido del patrimonio de la Nación, o bien, porque pese a haber sido de un particular, luego retornó a la Nación, por alguno de los procedimientos previsto para ello, destacando además los siguientes cuestionamientos propios acerca de los mismos, así:*

V.6.1.- PREDIO BALDIO SEGÚN EL CODIGO CIVIL.

El artículo 674 de la norma sustantiva civil, dice: “Se llaman bienes de la Unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un Territorio.....” A su vez, el art. 675 del mismo código, se refiere a los baldíos y es así como prescribe: “Son bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño”. En este orden de ideas, no queda duda que los baldíos son bienes públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales adjudicables, en razón de que el establecimiento los conserva para que una vez reunidas la totalidad de exigencias establecidas en la Ley, se formalice la adjudicación correspondiente a todos aquellos a quienes les asista el derecho.

V.6.2.- *Teniendo en cuenta entonces la naturaleza de bien baldío, tenemos que éste puede ser definido como aquél que nunca ha salido del patrimonio de la Nación, o bien, porque pese a haber sido de un particular, luego retornó a la Nación, por alguno de los procedimientos previstos para ello, destacando además los siguientes cuestionamientos propios acerca de los mismos, así:*

V.6.3.- PROPIEDAD DE LOS BALDIOS EN COLOMBIA.

El artículo 65 de la Ley 160 de 1994 indica que la Nación detenta la propiedad de los terrenos baldíos, aunque pueden ser entregados a particulares mediante un título expedido

por el INCODER. La propiedad privada sobre lo que era un baldío, sólo se puede acreditar mediante (i) título eficaz expedido por el Estado, por ejemplo una Resolución o Adjudicación y (ii) con títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de la ley en cita, en las que consten tradiciones de dominio por un lapso no inferior al que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria.

V.6.4.- EN QUÉ CONSISTE LA TITULACION DE BALDIOS Y CUALES SON LOS REQUISITOS? Es ante todo parte de la política de formalización de la propiedad rural y se dirige a regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de bajos recursos. Su fin es satisfacer las necesidades del ocupante, permitir el acceso a la propiedad de la tierra a quienes carecen de ella y contribuir a mejorar las condiciones económicas y sociales de los adjudicatarios. Es en consecuencia, un proceso mediante el cual el Estado entrega baldíos que tienen aptitud agropecuaria y/o forestal a personas naturales, a cooperativas campesinas, a empresas comunitarias, a fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro o a entidades de derecho público, teniendo en cuenta como normatividad el Capítulo XII de la Ley 160 de 1994 y los decretos reglamentarios 2664 de 1994 y 982 de 1986, para que cuando pase a propiedad del beneficiario, además de asegurar sus derechos y mejorar su patrimonio, igualmente incrementa sus posibilidades de obtener créditos y subsidios para proyectos productivos. Los requisitos son: (i) **Haber ocupado el terreno por espacio no inferior a cinco (5) años.** (ii) **Haberlo explotado económicamente por un término igual al anterior.** (iii) **Que la explotación que se ha adelantado en dichos predios corresponda a la aptitud del suelo, establecida por el INCORA en la inspección ocular, y** (iv) **Que el solicitante no sea propietario o poseedor a cualquier título de otros predios rurales en el territorio nacional.** En conclusión, los terrenos baldíos están destinados a ser adjudicados en propiedad a quienes los ocupen y exploten económicamente, dentro de las condiciones establecidas por la ley.

V.6.5.- LA OCUPACION ES LA FORMA DE ADQUIRIR LOS PREDIOS BALDIOS. Tal y como lo ha reiterado la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, el modo de adquisición del dominio de los terrenos baldíos es la **OCUPACION**, modo que se consuma ipso facto desde el mismo instante en que el colono u ocupante realiza sus siembras o cultivos o introduce su vacada o hato por el término que establece la ley. Lo que también nace como consecuencia directa del proferimiento del acto administrativo que le otorga su nuevo status de propietario, es una serie de obligaciones que se enmarcan dentro de órdenes de tipo económico y social, pues de allí dimana el reconocimiento de la titularidad del derecho real en cabeza del ocupante, una vez se plasma

la inscripción en el correspondiente certificado de tradición y libertad. En el caso que ahora se debate, se itera que conforme a las pruebas sumarias aportadas, la solicitante – ocupante, demostró el cumplimiento de la totalidad de presupuestos exigidos, pues respecto del primero de ellos, es evidente que se trata de un bien rural baldío, por ende adjudicable de conformidad con nuestra legislación sustancial positiva. En cuanto a los demás requisitos, contamos con la prueba testimonial y documental, de las que se extracta que la solicitante ejerció ocupación en forma material sobre el bien inmueble a adjudicar, por espacio de tiempo superior a cinco (5) años, y que la explotación del inmueble ha sido en agricultura. Igualmente, es preciso no perder de vista, que las extensiones de la **Unidades Agrícolas Familiares (U.A.F)**, están perfectamente determinadas en la **RESOLUCION N° 041 DE 1996**, que se refiere a municipios situados en las áreas de influencia de las respectivas gerencias regionales, correspondiéndole en consecuencia al predio **EL RETIRO** de la vereda Santa Rita de Ataco – Tolima, una **ZONA RELATIVAMENTE HOMOGENEA NRO 3. MARGINAL CAFETERA BAJA Y ALTA**, que comprende áreas geográficas con altitud de 1000 a 1300 y 1700 a 2000 m.s.n.m. Así las cosas, la **UNIDAD AGRICOLA FAMILIAR (U.A.F.)** de gran parte de la citada municipalidad, está comprendida entre el rango de 34 a 44 hectáreas, área muy por encima de la solicitada, ya que ésta es únicamente de **DIECIOCHO HECTAREAS HECTÁREAS MIL OCHO METROS CUADRADOS (18,1008 HAS)**.

V.7.- En el caso que ahora se debate, se itera que conforme a las pruebas sumarias aportadas, la solicitante para el buen suceso de la acción instaurada, demostró el cumplimiento de la totalidad de presupuestos exigidos, pues respecto del primero de ellos, es evidente que se trata de un bien rural baldío, por ende adjudicable de conformidad con nuestra legislación sustancial positiva. En cuanto a los demás requisitos, contamos con la prueba testimonial y documental, de las que se extracta que los solicitantes han ejercido como ocupantes en forma material sobre el bien inmueble a adjudicar, por espacio de tiempo superior a veinte (20) años.

V.8.- HECHOS DE VIOLENCIA. Tal y como quedara plasmado a lo largo de la actuación desplegada en la fase administrativa, se demostró plenamente el marco de violencia en que se vieron envueltas muchas regiones del país, especialmente por hechos atribuidos a grupos subversivos como las autodenominadas **FARC** y **PARAMILITARES** en territorios determinados y focalizados por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, Dirección Territorial Tolima, como la parte sur del departamento, entre ellos el Municipio de Ataco, Vereda Santa Rita, locación donde queda ubicada la finca **EL RETIRO** cuya ocupación ostentaba la ocupante **LEOPOLDINA**

SAIZ DE PERDOMO y su núcleo familiar, la cual fue objeto de despojo y abandono, originado por el desplazamiento forzado de cientos de personas. Acreditada entonces, la ocurrencia de hechos violentos exigidos por la ley 1448 de 2011, así como el transcurso de tiempo y demás exigidos por la ley 164 de 1990, para que les **ADJUDIQUE** el predio objeto de ocupación, centra el Despacho su atención en las peticiones de la solicitud, las cuales son susceptibles de ser ventiladas en este escenario judicial, destacando que el primer enfoque se refiere a la viabilidad de decretar la **RESTITUCION DE LA OCUPACION** y consecuentemente que obtengan por vía administrativa la **ADJUDICACION** del baldío, al configurarse plenamente el cumplimiento de la totalidad de requisitos para ello.

V.9.- HECHOS CONSTITUTIVOS DE OCUPACION SUSCEPTIBLES DE RESTITUCION POR FACTORES DE VIOLENCIA.

El autodenominado Grupo Armado Organizado ilegal -GAOI, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo o FARC – EP – que tradicionalmente había tenido un poder de dominio histórico en la región, específicamente en Ataco (Tol) por intermedio de diversos bloques y frentes como el Comando Conjunto Central Adán Izquierdo, el frente 21, la Columna Móvil “Jacobo Prias Alape” y “Héroes de Marquetalia”.

Aunado a lo demostrado respecto de las actuaciones que como ocupante desplegó la solicitante **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO**, es preciso no perder de vista el siguiente cuadro de violencia que generó el desplazamiento masivo, de gran parte de la comunidad en esta región a saber: la denominada guerrilla, los paramilitares y el ejército. Junto a ese flagelo de violencia armada ocasionaron los desplazamientos y el destierro aunado a otros problemas sociales, situación que llevó a las familias a dispersarse donde padres se tuvieron que separar de sus hijos a fin de protegerlos de ser reclutados ya fuera utilizando la fuerza o el convencimiento.

Debido a ello, muchos campesinos se vieron en la obligación de abandonar sus parcelas y se refugiaron en la ciudad u otros municipios del país. Algunos decidieron migrar hacia el casco urbano del municipio de Ataco y dedicarse a la actividad minera como medio de supervivencia laboral y económica. Para el año 2.000 el desplazamiento forzado en Ataco, presentó un incremento y su registro más alto fue en el año 2.001 el cual fue de 1866 y en el año 2.002 ascendió a 2192, agravando notoriamente la ocurrencia de graves violaciones de derechos humanos causados tanto por el aumento de acciones armadas como por contacto entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales, afectando poblaciones como la vereda Balsillas, Canoas San Roque y Canoas la Vaga del municipio de Ataco.

V.10.- DECLARACION RENDIDA POR JESUS MARIA LASSO TIQUE. (Folio41) el 7 de noviembre de 2012. Manifiesta que su profesión es agricultor y que reside en la vereda Santa Rita del Municipio de Ataco, que conoce a la solicitante y a su extinto esposo **LUIS PERDOMO**, y los conoce de toda la vida por ser oriundos de la misma vereda. Agrega, que la solicitante y su esposo eran ocupantes de los predios **El Retiro** y **El Chuquio** al momento del desplazamiento pero que desconoce la forma en que adquirieron los predios, puesto que solo reconoce a la señora **LEOPOLDINA** y a su núcleo familiar como únicos dueños, afirmando a su vez que después del desplazamiento su hijo **FERNANDO** fue quien retornó al predio.

V.11.- DECLARACION DE ABRAHAM ALDANA GUARNIZO (Folio 42). Manifiesta que su profesión es agricultor, residente en la vereda Santa Rita, que conoce a **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO** de toda la vida a excepción de los cinco (5) años que estuvo en condición de desplazamiento. Que conoce también a **FERNANDO PERDOMO SAENZ** desde que era un niño y que antes del desplazamiento tanto madre e hijos ocuparon el predio **el Retiro**, y que una parte de éste predio lo heredó **LEOPOLDINA** por parte de su padre quien fue poseedor u ocupante ahí, por tal motivo reconoce a la solicitante y a su núcleo familiar como señores y dueños del predio a pesar de haber sido desplazados y haber tenido que soportar los combates, pero que **FERNANDO PERDOMO** retornó al predio y a la fecha se encuentra en él.

V.12.- Finalmente, es palmarío establecer y reiterar que la solicitante señora **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO** y su núcleo familiar, vienen ostentando la calidad de ocupantes del predio **EL RETIRO**, pero que por los actos violentos desplegados por grupos subversivos y movimientos guerrilleros al margen de la ley, se generó un desplazamiento forzado que prácticamente obligó a muchos pobladores y a sus familias a emigrar en el año 2002, por lo que por un periodo de tiempo se vieron privados del uso, goce y disfrute del citado fundo, razón fáctica jurídica que por sí sola permitiría invocar por ésta vía la solicitud de restitución y de adjudicación por cumplir los requisitos de ley.

V.13.- Concordantemente con lo dicho, del haz probatorio, en aplicación del art. 78 de la Ley 1448 de 2011, al analizar en forma conjunta las pruebas recaudadas, básicamente las declaraciones rendidas y demás medios de probanza, se deja en claro la identificación del bien, su vocación agrícola y ocupación material del mismo por parte de los solicitantes, por un tiempo superior a 20 años. En consecuencia, en aplicación del principio de la buena fe exenta de culpa, la inversión de la prueba y la no existencia de oposición, permiten tener como demostrados en su conjunto los actos

propios de ocupante desplegados por LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO , y su familia al detentar físicamente el bien.

V.14.- Recabase entonces, que conforme a las reglas de la sana crítica y sumariedad de las pruebas, concluye el despacho, con certeza y convicción, que en el presente evento, se cumplen a cabalidad todos y cada uno de los elementos que estructuran la ocupación, ya que la prueba testimonial es clara, precisa y concordante con relación a los presupuestos necesarios para darse una sentencia favorable a los solicitantes; no sólo aquellos hacen referencia a la ocupación prolongada por más de 20 años de LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO y su núcleo familiar, en el predio que hoy por hoy continúa siendo objeto de actos propios de explotación agrícola por parte de los mencionados, los cuales se encuentran debidamente comprobados.

V.15.- Así las cosas, estando demostrados los elementos de la ocupación por cuanto la solicitantes ha detentado materialmente el bien conforme a las pruebas atrás enunciadas, esto es, acreditación de explotación agrícola, no reconocer a otras personas con mejor derecho, haber ocupado en forma pública e ininterrumpida por más de 20 años, por haber habitado en él, sin pagar arrendamiento u otros tributos, indudablemente se configuran los elementos esenciales de la ocupación a su favor, entonces, ha de acogerse su petición.

*V.16.- Bajo el anterior direccionamiento legal y en aplicación del artículo 88 inciso final de la ley 1448 de 2011, comoquiera que se encuentra perfectamente dilucidado en el desarrollo de la presente solicitud, es decir tanto en el trámite adelantado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, Dirección Territorial Tolima, como en la fase judicial, que se cumplieron íntegramente las exigencias administrativas y legales como son agotamiento del requisito de procedibilidad, identificación de las víctimas, legitimación para actuar (ocupantes – solicitantes), ubicación, identificación, tamaño y alinderamiento del bien a adjudicar, cumplimiento del requisito de tiempo para la adjudicación, proferimiento y notificación del auto admisorio de la solicitud, al Ministerio Público y autoridades regionales y realización de las publicaciones, se evidencia con absoluta certidumbre que no existe ninguna persona diferente a los ocupantes solicitantes señores **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO y su núcleo familiar**, con interés en el inmueble, el cual además se encuentra además hoy por hoy en su posesión material, circunstancias fáctico jurídicas que permiten enmarcar ésta específica actuación dentro de la preceptiva legal antes mencionada, por lo que en consecuencia se procederá a proferir inmediatamente la sentencia de formalización, restitución y orden de adjudicación en forma coetánea.*

V.17.- APLICACION DEL ARTICULO 97 DE LA LEY 1448

DE 2011, que dice “...Como pretensión subsidiaria, el solicitante podrá pedir al juez o Magistrado que como compensación...y con cargo a los recursos del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas, le entregue un bien inmueble de similares características al despojando, en aquellos casos en que la restitución material del bien sea imposible por alguna de las siguientes razones: a. b. c. y d...”

- Sobre este asunto específico, si bien es cierto el texto legal ya transcrito prevé la posibilidad de acudir a las COMPENSACIONES, no lo es menos que esta excepción a la regla está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones, las cuales deben observarse juiciosamente, pues de lo contrario se iría en contravía del espíritu de la misma ley, que ante todo está inspirada en garantizar el retorno y recomposición de la familia desplazada y despojada, recurriendo si es del caso a brindarle al solicitante y a su núcleo familiar todas las posibilidades legales – constitucionales que prácticamente le aseguran que tan desastrosos hechos violentos nunca más volverán a suceder, separándose eso sí de los designios de la propia naturaleza, respecto de los cuales el mismo hombre no tiene control.

- Así las cosas, sin pretender desconocer el contenido de las pretensiones PRIMERA y SEGUNDA del libelo, las cuales son de carácter Subsidiario, lo evidente es que las condiciones políticas y de seguridad en dicha localidad, han cambiado sustancialmente y por lo tanto, no se dan los presupuestos consagrados por la normatividad citada, para acceder a las mismas, ya que en realidad hasta la fecha, no se erige con suficiencia una verdadera motivación, para que la restitución se torne imposible, o por lo menos no obran pruebas que ameriten circunstancias que por su naturaleza u otra razón, impidan la permanencia del solicitante y su núcleo familiar en el predio cuya ocupación ostentan y que actualmente pretenden formalizar. No obstante lo anterior, se advierte eso sí, que de persistir fenómenos naturales u otros factores desestabilizadores, en el control pos-fallo y previa la realización de los estudios especializados que sean necesarios, así como de la información que se allegue por parte de CORTOLIMA o de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS o cualesquier otro entidad, se podrá estudiar nuevamente el aludido petitum.

V.18.- GARANTIAS LEGALES Y CONSTITUCIONALES

QUE BLINDAN LA RESTITUCION JURIDICA DEL INMUEBLE ABANDONADO. Como se ha expresado varias veces a lo largo de esta sentencia, es obligación del Estado otorgar junto con la restitución, un mínimo de garantías para restablecer las cosas al estado en que se encontraban, sobre los derechos de uso, goce y explotación, así como la reparación de los daños

causados. Consecuentemente con lo dicho, y atendiendo las condiciones de abandono del predio a restituir, se dispondrá que la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, coordine en forma armónica con la Alcaldía del municipio de Ataco o la gobernación del Tolima, o los Comités Técnicos del SENA o el Ministerio de Agricultura y UMATAS, y demás entidades oficiales sobre la existencia de PROYECTOS PRODUCTIVOS, los cuales se deberán poner en conocimiento de los solicitantes señores LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO y su núcleo familiar, para que en lo posible hagan uso de ellos y puedan explotar de acuerdo con la vocación agrícola del predio, la finca conocida como EL RETIRO.

VI.- DECISION

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué (Tolima)** administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR que la solicitante y víctima, señora **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.610.932 expedida en Ataco (Tolima), ha demostrado tener la **OCUPACION** sobre el inmueble rural de nombre **EL RETIRO**, distinguido con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 355-21412 y Código Catastral No. 00-01-0024-0009-000, ubicado en la Vereda Santa Rita del municipio de Ataco (Tolima), en extensión de **DIECIOCHO HECTAREAS HECTÁREAS MIL OCHO METROS CUADRADOS (18,1008 HAS)**, siendo sus linderos actuales los siguientes: **NORTE** : Se toma como punto de partida detallado con el N° 2, se avanza en sentido general sureste en línea quebrada por el margen de la vía hasta ubicar en punto N° 3, colindando con el predio de **SUCESIÓN GABRIEL ORTIZ DIAZ** en una distancia de 497, 466 metros. **SUR**: Desde el punto N° 6, en línea quebrada y en dirección suroeste hasta ubicar el punto N° 7, colindando en una distancia de 129,613 metros con el predio de **MISAEL PERALTA ORTIZ**; de allí se continúa en línea quebrada por el margen de la quebrada El Chuquio, en dirección noroeste hasta el punto N° 8 colindando en una distancia de 550.616 metros con el predio del mismo propietario. **ORIENTE**: Desde el punto N° 3 se sigue en sentido general sureste y luego suroeste, en línea quebrada y en colindancia continua por el margen vial en una distancia 178,007 metros con el predio de **Bernardo Aldana** hasta ubicar el punto número 4; del punto número 4 se sigue en sentido general sureste en línea quebrada por la vía y en colindancia continua en una distancia de 138,782 metros con el predio del mismo propietario, hasta ubicar el punto número 5; del punto número 5 se sigue en sentido general suroeste en línea quebrada, y en colindancia

continúa en una distancia de 123,074 metros con el predio de Abraham Aldana Guarnizo, hasta ubicar el punto número 6. **OCCIDENTE:** Desde el punto número 8, en dirección noreste en línea quebrada según la corriente de la quebrada Los Guamitos y en colindancia continua con el predio de Misael peralta Ortiz, en una distancia de 187,050 metros hasta ubicar el punto 9; del punto número 9 se sigue en sentido general noreste en línea quebrada y en colindancia continua, en una distancia de 198,850 metros con el predio de Aracelly Cutiva Serrano, hasta ubicar el punto número 1; de allí se continúa en línea recta, en dirección sureste hasta el punto número 10, colindando en distancia de 257,008 metros con el predio de Fernando Perdomo Sáenz; del punto número 10 se sigue en sentido general noroeste en línea quebrada, y en colindancia continua en una distancia de 109,712 metros con el predio del mismo propietario, hasta ubicar el punto número 11, y de éste punto se sigue en sentido general noroeste en línea quebrada y en colindancia continua en una distancia de 202,299 metros con el predio de Fernando Perdomo Sáenz, hasta ubicar el punto N° 2; éste último como punto de partida y encierra.

SEGUNDO: ORDENAR conforme al art. 71 de la Ley 1448 de 2011, la restitución del derecho de OCUPACION que ostentaba, respecto del predio EL RETIRO, identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 355-21412 y Código Catastral No. 00-01-0024-0009-000, ubicado en la Vereda Santa Rita del municipio de Ataco (Tol) cuyos linderos y área, están plasmados en el numeral anterior, a sus ocupante - solicitante señora LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO identificada con cédula de ciudadanía N° 28.610.932 de Ataco - Tolima y su núcleo familiar.

TERCERO: ORDENAR al INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL "INCODER" SUBGERENCIA DE TIERRAS RURALES que en cumplimiento de los preceptos consagrados en los artículos 72, 74 y los literales f) y g) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 2145 del 29 de octubre de 2012, proceda dentro del perentorio término de veinte (20) DIAS, contados a partir del recibo de la comunicación, a emitir el ACTO ADMINISTRATIVO de ADJUDICACION DE BALDIOS a que haya lugar, a nombre de la víctima solicitante señora LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.610.932 expedida en Ataco (Tol) en lo referente al predio baldío EL RETIRO que se detalla en la siguiente información: Constancia CIR No. 0011 del 15 de febrero de 2013, emanada de la DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS – DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA, y en el certificado de tradición y libertad expedido en la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL (Tolima), - Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 355-21412 y Código Catastral 00-01-

0042-0009-000, y registrando como víctima ocupante a **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO**. Una vez expedido, deberá remitir copia del referido acto administrativo a éste despacho judicial.

CUARTO: ORDENAR el REGISTRO de esta **SENTENCIA** en el Folio de Matrícula Inmobiliaria distinguido con el No. 355-21412 y Código Catastral No. 00-01-0024-0009-000, correspondiente al inmueble objeto de adjudicación, a fin de llevar a cabo la mutación respectiva. Secretaría, una vez obre en autos el **ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION** emanado del **INCODER**, libre la comunicación u oficio pertinente con el respectivo anexo a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral (Tolima), advirtiéndole una vez efectuado el registro deberá remitir a éste despacho copia de dicha inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria. Igualmente, se ordena expedir copias auténticas de esta sentencia y cuantas sean necesarias para los efectos legales a que haya lugar. Secretaría proceda de conformidad.

QUINTO: DECRETAR la cancelación de las **ANOTACIONES** No. 9 y 10, plasmadas en el Folio de Matrícula Inmobiliaria distinguido con el No. 355-21412. Secretaría libre las comunicaciones u oficios a que haya lugar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral (Tol), para que proceda de conformidad.

SEXTO: OFICIAR por Secretaría al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que dentro del perentorio término de dos (2) meses, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a la **actualización del PLANO CARTOGRAFICO O CATASTRAL** del predio **EL RETIRO**, cuya área verdadera conforme al levantamiento topográfico realizado por personal técnico de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Dirección Territorial Tolima, es de **DIECIOCHO HECTAREAS HECTÁREAS MIL OCHO METROS CUADRADOS (18,1008 HAS)**, siendo sus linderos actuales los relacionados en el numeral **PRIMERO** de esta sentencia.

SEPTIMO: Para llevar a cabo la realización de la diligencia de entrega material, el Despacho de conformidad con los preceptos establecidos en el inciso segundo del artículo 100 de la Ley 1448 de 2011, comisiona con amplias facultades al señor Juez Promiscuo Municipal de Ataco (Tol), quien contará para el efecto con el apoyo logístico y colaboración de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Dirección Territorial Tolima, entidad con la que queda en libertad de realizar las gestiones o coordinaciones pertinentes, teniendo en cuenta que el área del referido inmueble es **DIECIOCHO HECTAREAS HECTÁREAS MIL OCHO METROS CUADRADOS (18,1008 HAS)**,

siendo sus características individuales y generales, como linderos y demás los plasmados en el numeral **PRIMERO** de esta sentencia. Secretaría libre despacho comisorio y las comunicaciones u oficios a que haya lugar al juzgado comisionado y a la referida entidad, advirtiendo que previamente se deberá contar con el **acto administrativo de ADJUDICACION que expida el INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL "INCODER"** y que igualmente por tratarse de un proceso que se ventila bajo la órbita de la justicia transicional, el cumplimiento de lo acá ordenado deberá llevarse a cabo dentro del perentorio término de treinta (30) días, contados a partir del recibo de la comunicación.

OCTAVO: Secretaría libre oficios a las autoridades militares y policiales especialmente Comandos del Batallón de Infantería No. 17 General JOSE DOMINGO CAICEDO, del Ejército de Colombia, con sede en Chaparral (Tolima) y Comando del Departamento de Policía Tolima, quienes tienen jurisdicción en el Municipio de Ataco (Tolima) Vereda Santa Rita, para que en ejercicio de su misión institucional y constitucional, presten el apoyo que se requiera e igualmente para que coordinen las actividades y gestiones de su cargo, y así poder brindar la seguridad que sea necesaria a fin de garantizar el cumplimiento de lo acá decidido.

NOVENO: Disponer como medida de protección, la restricción establecida en el artículo 101 de la Ley 1448 de 2011, consistente en la prohibición para enajenar el predio objeto de adjudicación, el cual se encuentra individualizado en el numeral **PRIMERO** de esta sentencia, durante el término de dos (2) años, siguientes al proferimiento de esta sentencia. Secretaria libre comunicación a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral (Tol).

DECIMO: De conformidad con los preceptos establecidos en el artículo 121 de la Ley 1448 de 2011, se decretan como mecanismos reparatorios en relación con los pasivos de la víctima solicitante señora **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.610.932 expedida en Ataco (Tol) tanto la **CONDONACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL, ASI COMO DE OTRAS TASAS, CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS MUNICIPALES** que hasta la fecha adeude el bien inmueble baldío objeto de restitución denominado **EL RETIRO**, el cual se identifica con el folio de matrícula No. 355-21412 y Código Catastral No. 00-01-0024-0009-000, ubicado en la Vereda Santa Rita del municipio de Ataco (Tol), como la **EXONERACION** de los mismos, por el período de dos años fiscales comprendidos entre el primero (1º) de enero de dos mil trece (2013) y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil catorce (2014). Para el efecto, Secretaría libre la comunicación u oficio a que haya lugar a la Secretaría de Hacienda de Ataco (Tol)", a la

Alcaldía de la misma municipalidad y demás organismos o entidades departamentales o municipales a que haya lugar.

DECIMOPRIMERO: En el mismo sentido, conforme a lo preceptuado por el artículo 129 de la Ley 1448 de 2011, la solicitante ocupante **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO**, podrán acudir a los mecanismos previstos por la norma en cita, a fin de financiar actividades tendientes a la recuperación de su capacidad productiva. Secretaria libre la comunicación pertinente a las entidades financieras y crediticias relacionadas en el aludido precepto legal, específicamente al Banco Agrario, Oficina Principal de Bogotá y de Ataco (Tol).

DECIMOSEGUNDO: igualmente, se ordena que lo atinente a los servicios públicos domiciliarios y deudas crediticias del sector financiero adquiridas por la solicitante **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO**, con anterioridad a los hechos de desplazamiento y que se hubieren constituido en mora por ocasión del mismo, sean objeto de programas de condonación de cartera, que podrán estar a cargo del Fondo de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Secretaria libre las comunicaciones u oficios a que hubiere lugar.

DECIMOTERCERO: **ORDENAR** de acuerdo a lo reglado por los artículos 244, 246, 247, 250 y s.s., del Decreto No. 4800 de 2011, que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Nivel central y la Dirección Territorial Tolima, en coordinación con la Gobernación del Tolima – Secretaria de Desarrollo Económico y la Alcaldía Municipal de Ataco (Tol), dentro del perentorio término judicial de treinta (30) días, contados a partir del recibo de la comunicación y previa consulta con la víctima solicitante señora, **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.610.932 expedida en Ataco (Tol) y su núcleo familiar, adelanten las gestiones o coordinaciones que sean necesarias, para que a través de su programa de **PROYECTOS PRODUCTIVOS**, y con cargo a los recursos del **FONDO DE RESTITUCION** procedan a llevar a cabo la implementación de uno que se adecúe de la menor forma, a las características del predio y a las necesidades de la mencionada y su núcleo familiar. En el mismo sentido, y sin perjuicio de lo antes dispuesto conforme a lo preceptuado por el artículo 129 de la ley 1448 de 2011, podrá acudir a los mecanismos previstos por la norma en cita, a fin de financiar actividades tendientes a la recuperación de su capacidad productiva. Secretaria libre la comunicación pertinente a las entidades administrativas territoriales, financieras y crediticias relacionadas en el aludido precepto legal, específicamente Gobernación del Tolima, Banco Agrario Oficina Principal de Bogotá y de Ataco (Tol).

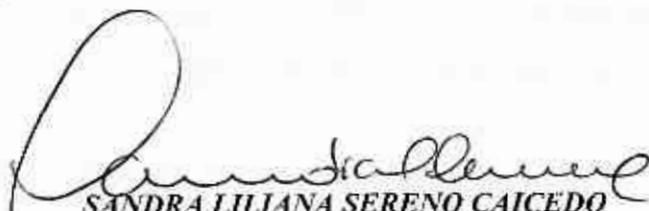
DECIMOCUARTO: OTORGAR a la víctima solicitante señora **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.610.932 expedida en Ataco (Tolima), el **SUBSIDIO DE VIVIENDA RURAL** administrado por el **BANCO AGRARIO** a que tienen derecho, advirtiendo a la referida la entidad bancaria que deberá desplegar tal diligenciamiento dentro del perentorio término de **SESENTA (60) DIAS**. En el mismo sentido, se pone en conocimiento de la solicitante y del Banco, que éste se concede en forma **CONDICIONADA**, es decir que se aplicará única y exclusivamente en el predio objeto de restitución y adjudicación, de nombre **EL RETIRO**, que se encuentra debidamente identificado y alinderado en el numeral **PRIMERO**, advirtiendo que debe diseñar y ejercer el control y vigilancia que sea necesario para el cumplimiento de la aludida condición. Secretaría libre las comunicaciones u oficios a que haya lugar.

DECIMOQUINTO: ORDENAR al Ministerio de **AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**, y a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS**, que por tratarse de un **PROCESO DE JUSTICIA TRANSICIONAL** para la materialización en el otorgamiento tanto del **PROYECTO PRODUCTIVO** como del **SUBSIDIO DE VIVIENDA RURAL** dispuesto en los dos numerales que anteceden, se dé **PRIORIDAD Y ACCESO PREFERENTE** a la víctima solicitante y ocupante como beneficiaria señora **LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.610.932 expedida en Ataco (Tolima), con enfoque diferencial dentro de los **Programas de Subsidio Integral de Tierras** (Subsidio para la adecuación de Tierras, Asistencia Técnica Agrícola, e Inclusión en Programas Productivos), coordinando lo que sea necesario con el **PROGRAMA ESTRATEGICO DE ADJUDICACION DE TIERRAS** y la **PRESIDENCIA GERENCIA DE VIVIENDA del BANCO AGRARIO**, anexando copia del **ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION** emitido por el **INCODER** así como el certificado de libertad y tradición que registre el mencionado acto administrativo y si fuere el caso, se han de vincular las **ENTIDADES TERRITORIALES** que prevé el artículo 250 del Decreto 4800 de 2011. Secretaría libre las comunicaciones u oficios a que haya lugar.

DECIMOSEXTO: NEGAR por ahora las pretensiones **PRIMERA** y **SEGUNDA** del acápite de pretensiones subsidiarias del libelo, por no haberse demostrado a cabalidad el cumplimiento de las exigencias establecidas en los artículos 72 inciso quinto y 97 de la Ley 1448 de 2011, advirtiendo que en el control pos fallo de ésta sentencia, de comprobarse que por efectos de la naturaleza o de otra índole no imputables a la solicitante, que afecten el inmueble objeto de restitución, se podrán tomar las medidas pertinentes.

DECIMOSEPTIMO: NOTIFICAR personalmente o a través de oficio o comunicación telegráfica la presente sentencia de conformidad a los preceptos establecidos en el artículo 93 de la Ley 1448 de 2011, a la **solicitante LEOPOLDINA SAIZ DE PERDOMO**, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Nivel Central y Dirección Territorial Tolima, al señor Gobernador del Departamento del Tolima, al señor Alcalde Municipal de Ataco (Tolima) y a los Comandos de las Unidades militares y policiales del lugar. Secretaria proceda de conformidad.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE


SANDRA LILIANA SERENO CAICEDO
Juez (E)